

Santiago, seis de mayo de dos mil veinticuatro.

A los escritos folios 38078-2024, 38137-2024 y 38273-2024: a todo, téngase presente.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de los fundamentos sexto a noveno, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente.

1º) Que, no resulta un hecho controvertido en esta sede, que el amparado Emilio Mahías Del Río, fue condenado a la pena privativa de libertad de cinco años y un día, como coautor de un delito de secuestro calificado en carácter de lesa humanidad, por sentencia de término, firme y ejecutoriada el día 24 de abril pasado, disponiendo Gendarmería de Chile su ingreso al Pabellón Asistir del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I.

Asimismo, no resultó controvertido que el amparado es un adulto mayor de 71 años, paciente cardíopata de riesgo, fue sometido a una angioplastia coronaria en el mes de junio de 2022 y padece de enfisema pulmonar y otras patologías de base.

Por su parte, la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería de Chile informó que para los internos condenados por delitos de lesa humanidad, en la Región Metropolitana cuenta con el penal de Punta Peuco y el Pabellón Asistir del C.C.P. Colina I, y que en este último *“actualmente las condiciones de hacinamiento presentes en la única dependencia para la contención de este tipo de internos que el penal Colina I posee, no permiten en lo absoluto la recepción de ningún interno, ya que se ha agotado el espacio físico disponible para realizar algún tipo de reconversión o habilitación de espacios”*.



2º) Que, para resolver la controversia constitucional planteada, debe recordarse que, en primer término, la Constitución Política de la República establece, en su primer artículo 1º, que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y luego garantiza a todos, en el artículo 19 N° 9, inciso 1: *“El derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo”*. A su turno, por mandato del inciso 2º del artículo 5 de la carta fundamental, es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución, *“así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”*.

3º) Que, en tal sentido, ha de tenerse presente la normativa internacional, entre la que se destaca primeramente el artículo 12 N° 1 y N° 2, letra c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que: *“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas”*. A su turno, el artículo 5º N° 1 y N° 2 del Pacto de San José de Costa Rica, garantiza el derecho a la integridad personal, señalando que: *“Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”*.



Ahora, en cuanto a la situación específica del amparado, debe tenerse en consideración las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Mandela), en especial la regla 24 que establece:

“1.- La prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica.

2. Los servicios médicos se organizarán en estrecha vinculación con la administración del servicio de salud pública general y de un modo tal que se logre la continuidad exterior del tratamiento y la atención, incluso en lo que respecta al VIH, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, y la drogodependencia”.

También debemos tener presente la Resolución Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la Organización de Estados Americanos (Washington D.C., Resolución 1/08, OEA/Ser/L/V/II.131 doc. 26, 2008).que en su Principio X señala que *“Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas especiales para satisfacer las*



necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal. El tratamiento deberá basarse en principios científicos y aplicar las mejores prácticas.

En toda circunstancia, la prestación del servicio de salud deberá respetar los principios siguientes: confidencialidad de la información médica; autonomía de los pacientes respecto de su propia salud; y consentimiento informado en la relación médico-paciente”.

4º) Que, finalmente, resulta útil considerar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobado por Decreto 162 del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado el 7 de octubre de 2017, cuerpo normativo que en su artículo 7, reconoce el Derecho a la independencia y a la autonomía, disponiendo: *“Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población.*

Los Estados Parte tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado”.



5º) Que en el caso en estudio, según aparece del mérito de los antecedentes, el amparado es un adulto mayor de 71 años, que padece de una cardiopatía de riesgo y enfisema pulmonar, entre otras patologías de base, y conforme da cuenta el médico German Andrés Armijo Ortiz, quien además prescribe en el informe médico acompañado, que *“en caso de dolor al pecho mayor a 20 minutos de duración, acudir a urgencias.”*

6º) Que, en este contexto, conforme a las disposiciones reseñadas precedentemente, en el caso de las personas adultos mayores privados de libertad, con enfermedades graves, el Estado debe brindar todos los tratamientos médicos y facilidades, como garantía del derecho a la integridad personal. Sin embargo, según se ha establecido en estos autos, mantener la ejecución de la condena del amparado al interior del recinto carcelario Colina I, atendida su condición de adulto mayor, el estado de las patologías que le afectan y los tratamientos periódicos que requiere, implica un grave riesgo para su salud, circunstancia que obliga a esta Corte a adoptar medidas urgentes con la finalidad de cumplir tanto con la normativa constitucional como con las convenciones internacionales a las que el Estado adscribió, en su oportunidad y, que en el presente caso, llevan a considerar excepcionalmente, por motivos de índole humanitario y de respeto a la dignidad esencial del ser humano, un régimen penitenciario diverso al determinado por Gendarmería de Chile para el cumplimiento de su condena, como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **se revoca** la sentencia apelada de diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Ingreso de Corte N° 852-2024 y, en su lugar, se declara que **se acoge** el recurso de amparo interpuesto a favor de Emilio Mahías Del Río,



disponiendo que el amparado cumpla la sentencia que le ha sido impuesta en proceso Rol N° 120.133-P seguidos ante el Ministro en Visita Extraordinaria Sr. Guillermo De La Barra Dünner, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco.

Sin perjuicio de lo resuelto, ofíciase al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, remitiendo los antecedentes que constan en el sistema computacional, especialmente el recurso de amparo deducido y el informe emitido por Gendarmería, para que se adopte las medidas que estime necesarias tendientes a mejorar la situación de habitabilidad del Pabellón Asistir del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I.

Comuníquese al M.V.E. Sr. Guillermo De La Barra Dünner y Gendarmería de Chile, de la forma más expedita.

Decisión acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Llanos y el Abogado Integrante Sr. Gandulfo, quienes estuvieron por confirmar la sentencia apelada, en virtud de sus propios fundamentos, estimando suficientes e idóneas las medidas ya adoptadas por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 14.765-2024





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. y los Abogados (as) Integrantes Pía Verena Tavorari G., Eduardo Nelson Gandulfo R. Santiago, seis de mayo de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a seis de mayo de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

